

gida por el señor Abogado del Estado, sobre impugnación de Resoluciones de este Departamento, que le denegaron el reconocimiento de los servicios prestados por el mismo, con carácter interino, como Auxiliar de la Fiscalía de Tasas, Oficial de Justicia Municipal y de la Administración de Justicia, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona, con fecha 8 de febrero pasado, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gregorio Pardo Delgado, contra Resoluciones de la Dirección General de Justicia de veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y tres y diez de enero de mil novecientos setenta y cuatro por las que se denegó al recurrente el reconocimiento, a efectos de trienios, de los servicios prestados como Oficial y Auxiliar interinos, sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Pablo García Manzano.—Enrique Presa.—Ángel González.—(Rubricados).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de marzo de 1975.

SANCHEZ-VENTURA

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

8941

ORDEN de 10 de marzo de 1975 por la que se acuerda dar cumplimiento en sus propios términos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso número 211/74.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 211/74 interpuesto por don Mariano Gómez Franco y don Antonio Damas González, Auxiliar y Oficial de la Administración de Justicia, representados y defendidos por el Letrado don Jorge Grau Tratacos, contra la Administración Pública, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre impugnación de Resoluciones de la Dirección General de Justicia, que les denegaron el reconocimiento de los servicios prestados con anterioridad a su integración en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha 9 de diciembre de 1974, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José Grau Tratacos, en nombre y representación de don Mariano Gómez Franco y don Antonio Damas González, contra las Resoluciones de la Dirección General de Justicia de treinta de enero de mil novecientos setenta y cuatro y dos de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, que denegaron las peticiones de los recurrentes sobre cómputo de servicios a efectos de trienios, y contra las Resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición de veintidós de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, y debemos declarar y declaramos que las referidas Resoluciones no son conformes a derecho, y las anulamos y dejamos sin efectos, declarando en su lugar que a los recurrentes les asiste el derecho a que se les compute, a los efectos de trienios, el tiempo efectivamente servido con anterioridad a su integración en los Cuerpos respectivos y que les fueron reconocidos en las Ordenes de uno de junio y veintinueve de julio, ambas de mil novecientos cuarenta y ocho, con percepción de las diferencias de retribución que por ello les corresponde desde la entrada en vigor de la Ley ciento uno/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, condenando a la Administración a estar y pasar por estas declaraciones y a su efectividad y cumplimiento; sin hacer especial declaración sobre costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, y luego que gane firmeza, librese certificación literal de la misma y remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al Órgano demandado, quien deba llevar aquélla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Francisco J. Wihelmi. Julián García.—Diego Rosas.—(Rubricado).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de marzo de 1975.

SANCHEZ-VENTURA

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

8942

ORDEN de 10 de marzo de 1975 por la que se acuerda dar cumplimiento en sus propios términos a la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona en el recurso número 289/1974.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 289 de 1974 interpuesto por el Auxiliar de la Administración de Justicia don Vicente Mendizábal Arregui, representado por el Procurador señor Rodríguez, y dirigido por el Letrado señor Castro, contra la Administración, representada y dirigida por el señor Abogado del Estado, sobre impugnación de Resolución de la Dirección General de Justicia, que le denegó el reconocimiento de los servicios prestados por el mismo con anterioridad a su integración en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona, con fecha 8 de febrero pasado, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación del presente recurso contencioso-administrativo, promovido por la representación de don Vicente Mendizábal Arregui, Auxiliar de la Administración de Justicia, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tolosa (Guipúzcoa), contra Resoluciones de la Dirección General de Justicia de diecisiete de mayo y once de junio de mil novecientos setenta y cuatro, esta última desestimatoria del previo recurso de reposición, que denegaron al demandante el reconocimiento de tiempo de servicios prestados con anterioridad a la integración en el Cuerpo correspondiente, en virtud de la Ley de ocho de junio de mil novecientos cuarenta y siete, a que las presentes actuaciones se contraen, debemos declarar y declaramos la nulidad e ineficacia de las citadas Resoluciones, por su desconformidad a derecho, y en su lugar así bien declaramos el derecho que asiste al mencionado recurrente a que le sea reconocido a todos los efectos, especialmente al de trienios, el tiempo de servicios efectivos reconocidos por la Administración en la relación publicada por Orden ministerial de veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, reconocimiento que ha de surtir efectos desde la fecha de entrada en vigor de la Ley ciento uno/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre y en consecuencia ordenamos a la Administración que rectifique en tal sentido el anexo IV y abone al demandante, desde la indicada fecha, las diferencias retributivas dejadas de percibir por tal concepto. Todo ello sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Pablo García Manzano.—Enrique Presa.—Alvaro Galán.—(Rubricados).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de marzo de 1975.

SANCHEZ-VENTURA

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

8943

ORDEN de 11 de marzo de 1975 por la que se acuerda dar cumplimiento en sus propios términos a la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso número 1.411-73.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 1.411/73 interpuesto por el Oficial de la Administración de Justicia don Ángel Rodríguez Soria, en su propio nombre y representación, contra la Administración Pública, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre impugnación del acuerdo de la Dirección General de Justicia, que le denegó el reconocimiento de los servicios prestados por el mismo con anterioridad a su integración en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, se ha dictado sentencia por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecha 14 de febrero pasado, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, por no estar ajustados a derecho los acuerdos de la Dirección General de Justicia de fecha dos de septiembre de mil novecientos setenta y dos, que denegó a don Ángel Rodríguez Soria el reconocimiento de servicios prestados a efectos de trienios, y el de diecisiete de octubre de mil novecientos setenta y tres, que desestimó la reposición procede estimar el recurso contencioso-administrativo contra ellos interpuesto, por el citado recurrente y declarar el derecho que le asiste a serle computado, a todos los efectos, activos y pasivos, el tiempo de servicios por él prestados con anterioridad a su integración en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia por virtud de la Ley de ocho de junio de mil novecientos cuarenta y siete, condenando a la Administración demandada a adoptar

las medidas necesarias para su efectividad. Se desestiman las demás peticiones. Todo ello sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Jesús Díaz.—Luis Cabrerizo.—José L. Martín. (Rubricados).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de marzo de 1975.

SANCHEZ-VENTURA

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE MARINA

8944

ORDEN de 22 de abril de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña, con fecha 25 de marzo de 1975, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Maquinista Guardapescas don Daniel Yáñez Lorenzo.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Daniel Yáñez Lorenzo, Maquinista Guardapescas y Jefe de Administración Civil de primera clase (Inspector de Buques Guardapescas) contra resoluciones de este Ministerio que le denegaron sus pretensiones sobre liquidación de haberes activos anteriores a su situación pasiva, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña ha dictado sentencia con fecha 25 de marzo de 1975, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación parcial del recurso interpuesto por don Daniel Yáñez Lorenzo contra resoluciones del Ministerio de Marina de 8 de octubre de 1973 y 17 de diciembre de 1973, que confirman la del excelentísimo señor Almirante Jefe del Departamento de Personal de 9 de abril de 1973, debemos declarar y declaramos los acuerdos recurridos ajustados a derecho y los confirmamos en cuanto a que en su parte dispositiva deniegan al actor su petición de que se ordene la liquidación de sus haberes activos que pudieran corresponderle como disponible forzoso desde 1 de junio de 1943 al 3 de marzo de 1968, pero en cambio deben declararse en parte contrarios a derecho y anularse, en tanto y en cuanto sus fundamentos, de gran trascendencia como complementarios de la aludida Orden de 1971, no reconocen al recurrente su condición de Jefe de Administración Civil de primera clase (Inspector de Buques Guardapescas) en la forma que declara en estos considerandos y también en cuanto no reconoce al actor el tiempo de separación por depuración desde 1 de junio de 1943 a 5 de marzo de 1968 como servicios prestados en orden a efectos pasivos para la computación de trienios, con estimación de su petición subsidiaria.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1975.

PITA DA VEIGA

Excmos. Sres. ...—Sres. ...

MINISTERIO DE HACIENDA

8945

ORDEN de 10 de marzo de 1975 por la que se aprueba el Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Hacienda Pública y las Empresas explotadoras de los canódromos españoles para el pago de la tasa sobre apuestas, señalada en el artículo 222 de la Ley 41/1964, durante el período de 1 de enero a 31 de diciembre de 1975.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de la Comisión Mixta designada para elaborar las condiciones a regir en el Convenio que se indica,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le otorgan las Leyes de 28 de diciembre de 1963 y 11 de junio de 1964, y las Ordenes ministeriales de 19 de noviembre de 1964, 3 de mayo de 1966 y 28 de julio de 1972, ha acordado lo siguiente:

Primero.—Se aprueba el Convenio fiscal de ámbito nacional con la mención «Convenio sobre apuestas 1/1975», entre la Hacienda Pública y los canódromos españoles integrados en la Federación Española Galguera, para la exacción de la tasa que grava las apuestas que se celebren en los expresados canódromos, con sujeción a las cláusulas y condiciones que pasan a establecerse.

Segundo.—Período de vigencia: Este Convenio regirá del 1 de enero al 31 de diciembre de 1975.

Tercero.—Extensión subjetiva: Quedan sujetos al Convenio los 17 canódromos en funcionamiento, integrados en la expresada Federación Española Galguera, que figuran en la relación definitiva aprobada por la Comisión Mixta en su propuesta de 26 de febrero de 1975.

Cuarto.—Extensión objetiva: El Convenio comprende las actividades y hechos imponibles dimanantes de las mismas, que se detallan a continuación:

a) Actividades: Apuestas celebradas en espectáculos deportivos en su especialidad de canódromos.

b) Hechos imponibles: Exclusivamente las quinielas, tripleta o cualquier modalidad de apuesta que pueda ser sometida a tributación por el artículo 222, 3, apartado b), de la Ley 41/1964.

Quinto.—Cuota global para el conjunto de contribuyentes y por las actividades y hechos imponibles contenidos en el Convenio se fija en treinta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil (37.674.000) pesetas.

Sexto.—Reglas de distribución de la cuota global: Para imputar a cada contribuyente sus bases y cuotas individuales, será tenido en cuenta el volumen de las apuestas celebradas, sirviendo de norma para su determinación las liquidaciones aprobadas con carácter definitivo por la Federación Española Galguera, número de reuniones celebradas, personal afecto al servicio y liquidaciones de arbitrios municipales.

Séptimo.—La Comisión Ejecutiva del Convenio realizará el señalamiento de las cuotas individuales y elevará al Servicio Nacional de Loterías la relación de las mismas, en la forma y plazos establecidos en el artículo 15 de la Orden de 28 de julio de 1972, y a estos efectos sus componentes tendrán las atribuciones y deberes que resulten del artículo 99 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963 y del artículo 13, apartado 1), párrafos, a), b), c) y d), de la citada Orden ministerial.

Octavo.—Pago: Las cuotas individuales serán ingresadas en dos plazos, con vencimientos el 20 de junio y 20 de noviembre de 1975, en la forma prevista en el artículo 17 de la Orden de 28 de julio de 1972.

Noveno.—La aprobación del Convenio no exime a los contribuyentes de sus obligaciones tributarias por actividades, hechos imponibles y periodos no convenidos, ni de las de carácter formal, documental, contable o de otro orden que sean preceptivas, salvo las de presentación de declaraciones-liquidaciones por los hechos imponibles objeto del Convenio.

Décimo.—La tributación aplicable a las altas y bajas que se produzcan durante la vigencia del Convenio, el procedimiento para sustanciar las reclamaciones, que deberán interponerse ante el Servicio Nacional de Loterías, y las normas de garantías para la ejecución y efectos de aquél, se ajustarán a lo que para estos fines dispone la Orden de 28 de julio de 1972.

Undécimo.—En todo lo no regulado en la presente, se aplicará, en cuanto proceda, la mencionada Orden de 28 de julio de 1972.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 10 de marzo de 1975.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, Fernando Benzo Mestre.

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Loterías.

8946

ORDEN de 14 de marzo de 1975 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Oviedo, dictada en 30 de noviembre de 1973, en recurso contencioso administrativo número 150/1973, interpuesto por «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 9 de diciembre de 1971, en relación con liquidación practicada por el concepto tributario Impuesto de Emisión y Negociación de Valores Mobiliarios.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 30 de noviembre de 1973 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo en recurso contencioso administrativo número 150/73, interpuesto por «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.» contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 9 de diciembre de 1971, en relación con liquidación practicada por el concepto tributario Impuesto de Emisión y Negociación de Valores Mobiliarios.